

Durante el año 2018, como en todos los anteriores hubo una decidida ofensiva contra los sectores populares. Uno de los objetivos que se propuso el gobierno, claramente fue el ajuste.

Ni bien asumió el gobierno amparado en la legitimidad que le otorgaron los votos en el 2015, puso en marcha su plan de transferir riquezas en favor de los sectores más concentrados de la economía.

Y en esta línea se profundizó la pérdida de derechos de los trabajadores en general y avanzó sobre la Reforma del Estado, tendiente a reducir la cantidad de trabajadores y desfinanciar las áreas sociales, moldeando un Estado al servicio de los intereses de los poderosos. Este avance ellos lo llaman "Modernización del Estado".

Este vertiginoso andar del gobierno nacional y provincial se vio claramente en los miles de despidos que hubo en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden municipal. A ello se suma la profundización en el desfinanciamiento de áreas sociales y combinado con el creciente endeudamiento externo muestran claramente que la crisis que el mismo gobierno agudizó se descarga sobre el conjunto del Pueblo.

También la eliminación de las retenciones a las exportadoras de granos y cereales, a las mineras y los tarifazos son pruebas contundentes de la veracidad de nuestras afirmaciones.

En esta embestida sobre los intereses de los sectores populares, podemos subrayar que el gobierno firmó de paritarias a la baja para los años 2016, 2017 y 2018 con sus gremios amigos y ello lo impuso con una iniciativa muy clara de fragmentar la creciente pelea social en la provincia de Buenos Aires.

En todo momento la estrategia de fragmentación fue acompañada, tanto en la provincia como en la nación, por el aumento en la política de judicialización, criminalización y represión de la protesta social. Este objetivo apunta claramente a la intención de retrasar la comunión entre el conjunto del Pueblo con las organizaciones populares, incluyendo a nuestra ATE que se han puesto al hombro la pelea contra el ajuste.

El mensaje es directo, no es solo a los militantes y dirigentes de las organizaciones sino al conjunto del pueblo: "Si pelean por un derecho y por un Estado distinto intentado mejorar sus condiciones de vida habrá palos, represión y también encarcelamiento y judicialización".

Mediante la Reforma del Estado, la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica y distintos decretos de ajuste dictados en la provincia, se intenta precarizar aún más las relaciones laborales y abrir la puerta al sector privado en desmedro del Estado para que hagan todo tipo de negocios con los fondos públicos.

La estrategia de reformar el Estado para condicionar la matriz distributiva en el tiempo que viene, a la vez el intento de fragmentar la lucha social y laboral que emerge como respuesta ante las políticas de ajuste y el avance y crecimiento de acciones represivas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, apuntan a intimidar al conjunto de la población con el fin de evitar el proceso de masividad que se debe dar para poder derrotar las políticas neoliberales.

Un claro ejemplo de ello es el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, donde una de las variables es condenar a las mayorías populares y a los trabajadores a que en lo que hace a las

políticas sociales y laborales la crisis se descargue en estos sectores, ya que una de las condiciones es que la inversión en materia de gasto público no podrá superar la inflación, al igual que los aumentos salariales.

Esta ley nos condena en materia salarial a no recuperar lo perdido en los últimos años, tan solo y en el mejor de los casos, se podría empatar a la inflación en los tiempos venideros. Y en lo que hace a los presupuestos ya desfinanciados, a que sigan de igual manera.

Pero a pesar de todo, los trabajadores han ganado las calles, las mismas calles y plazas que guardan aún los ecos de tantas movilizaciones y protestas desde que el tan augurado “cambio” llegó a fines del año 2015.

Estas políticas han perjudicado a nuestra sociedad, trabajadores asalariados, pequeñas y medianas empresas y comerciantes ven hoy con incertidumbre y dolor el derrumbe de los salarios, de la producción y de las ventas.

Pero sobre todo ha llegado a las familias más vulnerables que con enorme pesar son atravesadas por la desesperación de no poder acceder a servicios y derechos básicos.

Mientras tanto, nuestro compromiso es debatir, advertir y convencer a quienes no nos estén acompañando, de que éste camino solo acarrea más dolor para nuestras familias, nuestras ciudades y nuestro país. En cada escuela, en cada fábrica, en cada familia, en cada comercio, en cada esquina, en cada calle, nos espera el desafío de sembrar conciencia y sensatez ante tanto desmadre y desvergüenza política.